



La Cumbre y la migración

(Olga Pellicer Pág. 51 – 52)

Ya pasaron las primeras felicitaciones y sonrisas por el éxito de “la cumbre de los tres amigos”. Sí, hay motivos para el beneplácito: es positivo que se reanuden los encuentros entre los miembros del T-MEC, tener una agenda que identifique coincidencias y diferencias existentes entre ellos y elaborar una hoja de ruta que, con mayor o menor precisión, establezca temas a discutir antes del próximo encuentro.

Ahora bien, más allá de esos logros, lo obtenido en el avance hacia el manejo de los problemas prioritarios para México es poco, y la distancias entre las palabras y los hechos, grande. Dentro de esas prioridades se encuentra, sin lugar a duda, el fenómeno de la migración.

Se trata de un fenómeno que ha evolucionado de manera muy significativa durante los últimos 10 años. La aparición de niños no acompañados fue el primer signo de preocupación; más tarde aparecieron las caravanas, que son una fracción de los que atraviesan en pequeños grupos, pero son muy visibles y política-mente complejas.

Después la situación se ha vuelto aún más difícil, porque los grupos que llegan a nuestra frontera sur son más numerosos y diversos. Algunos vienen de lejos, aprovecharon épocas de bonanza en Brasil o Chile y, ante los cambios en la situación económica de esos países, se han visto obligados a caminar hacia el norte con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Es el caso, entre otros, de los grupos haitianos, cuyo número ha crecido sorpresivamente en México.

El cambio ocurrido en el fenómeno de la migración coincidió con la del movimiento social que él encabeza.

En cambio, el modo conciliatorio aparece cuando requiere consolidar el capital político acumulado. Es decir que es generoso, incluso con sus adversarios, después de cada triunfo: la dirigencia del PRD, la jefatura de Gobierno, la obtención de la candidatura o la obtención de la banda presidencial. Este patrón estratégico ayuda a explicar, al menos en parte, la radicalización que ha vendido creciendo en el discurso de López Obrador y que probablemente se incrementará durante el primer trimestre del año próximo. Normalmente el ciclo del poder presidencial mexicano, marcado por el reloj sexenal, define al cuarto año de gobierno como el lapso en que comienza el declive de los mandatarios.



Es evidente que el presidente no está dispuesto a dejarse aplastar por esta tradición y para librarse de ella cuenta con el ejercicio de la revocación de mandato que, en realidad, ha sido emplazado como una “ratificación” popular a su gestión. Si López Obrador consigue el próximo mes de marzo un espaldarazo robusto en las urnas, durante el cuarto año de su gobierno mantendrá altos niveles de popularidad. Para lograrlo requiere, sin embargo, no sólo contar con un respaldo pasivo a su trabajo que es el que los estudios de opinión logran capturar, sino una aprobación activa, masiva y sin ambigüedades de su base social.

En otras palabras, buscaría que un gran número de personas visite las urnas y ratifique ahí la aprobación. Igual que logró movilizar hace 25 años a los campesinos tabasqueños o a quienes lo defendieron del pretendido desafuero de 2005, igual que hizo cuando fundó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) o cuando consiguió que éste obtuviera registro como partido político gracias a la participación muy concurrida de sus militantes a las asambleas exigidas por la ley electoral, en esta ocasión el presidente se ha vuelto a radicalizar con el objetivo de movilizar a su base para que lo apoye con igual contundencia.

La intención es tensar la cuerda cuanto sea posible para que sus seguidores valoren como esencial para el destino, no sólo de la Cuarta Transformación, sino del país entero, concurrir a la cita convocada. Por cierto que, a excepción del episodio del desafuero, todas las veces que López Obrador se ha puesto en modo radical ha utilizado como bandera política el tema energético. Lo hizo en Tabasco, cuando los pozos; lo hizo en 2012, cuando disputaba la candidatura del PRD con Marcelo Ebrard; lo hizo en 2013, cuando se estaban celebrando las asambleas fundacionales de Morena, y lo ha vuelto a hacer en el presente, con la iniciativa de reforma energética.

El mandatario entiende bien que el control gubernamental de los activos energéticos es un asunto que por razones históricas despierta el nacionalismo más emotivo y, por tanto, moviliza masivamente. Si el patrón de comportamiento no rompe regularidades, el López Obrador conciliador no regresará a Palacio Nacional, sino hasta después de haber recibido un respaldo amplio en la ratificación de su mandato. Mientras tanto, mejor asirse con fuerza al pasamanos, porque se va a agitar con fuerza el vagón del Metro donde todas las personas viajamos.



Trump que convirtió a los migrantes que buscan entrar a Estados Unidos por la frontera sur en amenaza para la seguridad nacional de ese país. La llamada “securitización” de la migración tuvo una gran influencia en el imaginario colectivo de la ciudadanía estadounidense. En la actualidad, la mayoría de republicanos, buen número de demócratas y reporteros de los principales medios de comunicación coinciden en ver la migración como un flujo que no debe entrar a territorio estadounidense. México queda, así, convertido en el corredor donde quedan atrapados migrantes cuyo principal anhelo es entrar a Estados Unidos. ¿Cómo se trató un problema tan complejo y grave para nuestro país en la cumbre de los tres amigos?

La “Declaración conjunta de los líderes de América del Norte: reconstruyendo mejor juntos” dedica un espacio corto al tema de la migración. El asunto fundamental es, dado el cambio cuantitativo y cualitativo al que nos hemos referido, cuánto afecta a México. Pero esto fue eludido a favor de un enfoque en el que los tres países parecen estar en igualdad de circunstancias. Error de quienes redactaron el texto no introducir la frase necesaria para fijar las diferencias. Éstas se registraron en otros temas; por ejemplo, en cambio climático es claro que México no comparte los mismos objetivos que Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, por motivos poco comprensibles, esa diferencia no quedó asentada en el caso de migración. El resultado fue un texto sin ningún avance en el manejo del problema.

Con tales antecedentes no es extraño que días después de terminada la Cumbre se diera a conocer el acuerdo para reinstalar el programa Quédate en México que había sido suspendido por Bi-den—, según el cual quienes han solicitado asilo en Estados Unidos esperan en México mientras su petición es procesada. Tal decisión fue obligada por la sentencia dictada por un juez texano (nombrado por Trump), turnada a la Suprema Corte, que argumentó que la cancelación del programa no estaba debidamente fundamentada; era, por lo tanto, obligatorio reinstalarlo. Buen ejemplo de la politización del Poder Judicial en Estados Unidos.

La reanudación del programa es un duro golpe contra los propósitos de Bi-den, quien durante la campaña electoral y en los primeros meses de gobierno se había empeñado en poner fin a los programas inhumanos y poco eficientes que había instalado su antecesor. Según el actual director de la Agencia de Seguridad de la Patria (HSO, por sus siglas en inglés), el programa desviaba recursos y personal de otras prioridades, tenía costos humanos injustificados y fallaba en el intento de combatir la migración irregular.

La visión crítica de ese programa es compartida por Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), institución que “ha expresado desde sus comienzos sus serias preocupaciones sobre el programa y su impacto sobre la seguridad y el derecho a un debido proceso de los solicitantes de asilo” (The Washington Post, 2 de diciembre de 2021).



La decisión de la Suprema Corte no se podía implementar sin el acuerdo de México para reanudar el programa. Tal situación colocó a México ante un problema mayúsculo. De una parte, es bien sabido que no se cuenta con las condiciones para proporcionar alojamiento, alimentación, cuidados médicos, educación y, sobre todo, seguridad a las decenas de miles que irán llegando a las ciudades fronterizas del norte. Según información del artículo citado de The Washington Post, defensores de derechos humanos han documentado más de mil ataques violentos contra los migrantes que han permanecido en México durante la vigencia del programa.

De otra parte, se tiene conciencia de la importancia que tiene para el conjunto de la relación con Estados Unidos cooperar en el manejo del tema migratorio. Esto se aprendió desde que en los años de Trump se aceptó, primero en enero y después en junio de 2019, convertirse en el ejecutor principal de la contención de migrantes que atraviesan México para llegar a Estados Unidos.

Al parecer, lo que se obtuvo a cambio esta vez fue la puesta en marcha de Sembrando Oportunidades. Un programa para la creación de empleo en el sur de México y Centroamérica muy similar al conocido Sembrando Vida que, por algunos motivos, no había sido del agrado del gobierno de Estados Unidos.

Así, tres años después de haberse recibido el documento de la CEPAL para el desarrollo integral de Centroamérica, dos visitas de la vicepresidenta Kama-la Harris para hablar de la cooperación para combatir los problemas de raíz que alientan la migración desde el Triángulo del Norte, y una cumbre trilateral, Sembrando Oportunidades es lo más que se logra para trabajar conjuntamente para el desarrollo de Centroamérica. El panorama es desalentador; difícil prever qué se dirá en el siguiente encuentro de los tres amigos el año próximo, si se refieren a la migración que tan seriamente profundiza los problemas de inseguridad y violencia en México.

Prisioneros del miedo

(Pedro Zamora Briseño, pág. 18-22)

Los primeros disparos se escucharon alrededor de las cuatro de la tarde del martes 7, en las inmediaciones de Villa Victoria, cabecera municipal del municipio de Chinicuilá. Conforme pasó el tiempo, el impacto de las detonaciones creció y después se produjo una balacera que se prolongó más de dos horas en pleno centro del pueblo, cerca del Palacio Municipal.

Fue una nueva incursión armada de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes se enfrentaron a elementos de la Guardia Comunitaria local, conocidos por los lugareños como Los Comunitarios.



A la madrugada siguiente, un comando criminal usó drones con explosivos para atacar el edificio del Ayuntamiento, que sufrió daños en el techo. Simultáneamente algunos de sus integrantes, provistos de chalecos antibalas y armas largas, irrumpieron en viviendas del rumbo del llamado Panteón Nuevo. Tras derribar puertas y amenazar a los moradores, voltearon muebles y revisaron rincones. Algunos testigos dicen que buscaban a efectivos de la Guardia Comunitaria.

Antes de que abandonaran el pueblo hubo otra balacera, en la que no se reportaron muertos o heridos. Después del amanecer, cuando ya había pasado todo, un helicóptero de la Guardia Nacional sobrevoló la zona, se escucharon algunos disparos en los cerros aledaños y la aeronave se retiró.

El miércoles 8, alrededor de 10 familias, la mayoría afectadas por el allanamiento previo, empaclaron algunas pertenencias y se fueron del municipio.

A lo largo de los últimos dos años, habitantes de esta cabecera y de decenas de comunidades y rancherías del municipio han sido víctimas de desplazamiento forzado por la violencia criminal. Quienes han podido se trasladaron a poblaciones de Colima y Jalisco, o bien a Estados Unidos. Como consecuencia, varias localidades se encuentran vacías o semivacías. Es el caso de La Higuera Panda, Barranca Seca, Hihuitlán, Huizontla y El Salitre.

Hace meses, recuerda una mujer, un grupo de pistoleros llegó por sorpresa a bordo de camionetas, tiroteando las casas. Los hombres de la comunidad enviaron a sus familias a la cabecera municipal para quedarse a enfrentar a los agresores y, como estrategia, trozaron la carretera principal para impedir el acceso de vehículos. Posteriormente tuvieron que salir, porque los criminales ingresaron por un camino secundario con vehículos monstruos y los atacaron con granadas.

En otras localidades, como Hihuitlán y Barranca Seca, la mayoría de los pobladores originales emigró paulatinamente y en su lugar se asentaron presuntos miembros del CJNG.

“Les ofrecían despensas con el nombre del líder del cártel y tenían que aceptarlas porque, si se negaban, así les iba –dice un testigo–. Al recibirlas les tomaban foto y les preguntaban su nombre. Entonces muchos de los habitantes mejor se fueron por miedo, por no saber con quiénes podrían estarse involucrando”.

—¿Allá no entran los elementos de la Guardia Nacional?

—A veces pasan por ahí, pero los del cártel tienen halcones que les avisan cuando se acercan y entonces salen de los ranchos y se refugian en los cerros. También tienen drones a los que les cuelgan granadas para que no se los tumben, porque si lo hacen van a explotar.



Procurador fiscal, salpicado por operaciones de evasión

(Mathieu Tourliere, pág. 6-8)

El procurador fiscal Carlos Romero Aranda se encuentra en el visor de dos poderosos miembros de la Cuarta Transformación: Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, y el senador Ricardo Monreal Ávila. Ambos tienen en sus manos los resultados de una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que vincula al procurador con posibles operaciones de evasión fiscal.

En el transcurso del año Ramírez de la O y Monreal pidieron por separado a Santiago Nieto Castillo los hallazgos de la UIF, que venía investigando a Romero Aranda desde febrero, cuando recibió una denuncia por extorsión contra funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y abogados de despachos vinculados con su titular.

Ramírez de la O pidió la información a la UIF después de saber que, a espaldas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y fuera de sus atribuciones, Romero Aranda había firmado por lo menos dos sonadas denuncias por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR); Monreal, por su parte, solicitó los datos por un asunto vinculado con las denuncias contra el empresario de outsourcing Raúl Beyruti Sánchez.

Datos de la investigación de la UIF obtenidos por Proceso exhiben discrepancias entre la declaración patrimonial de Romero Aranda y los ingresos que reportó ante el Servicio de Administración Tributaria, lo que sugiere “una evasión fiscal”, delito que el propio Romero es el encargado de combatir como titular de la PFF.

Según la investigación, mientras Romero indicó que compró bienes inmobiliarios por 28.8 millones de pesos entre 2013 y 2020, declaró ingresos por apenas 6.5 millones de pesos en el mismo lapso. Aparte, algunas empresas de las que es socio han deducido de sus impuestos montos superiores a sus ingresos durante los últimos siete años.